JURISPRUDENCIA AMBIENTAL INTERNACIONAL

(SEGUNDO SEMESTRE 2019 - PRIMER SEMESTRE 2020)

ROSA M. FERNÁNDEZ EGEA

Profesora de Derecho Internacional Público

Universidad Autónoma de Madrid

Sumario: 1. Introducción. 2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 4. Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio.

1. Introducción

Como sigue siendo la tónica general en los últimos años, no han sido muy numerosas las controversias internacionales con incidencias ambientales que han sido conocidas por los tribunales internacionales existentes. Se puede observar una tendencia, aún algo tímida, pero al alza, de casos ambientales interpuestos ante los tribunales internacionales regionales que garantizan la observancia de los derechos humanos. Este es el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se evidencia así la cada vez más patente vinculación entre los derechos fundamentales y la protección del medio ambiente¹.

Así, en el tiempo abarcado en la presente crónica, ha de destacarse un pronunciamiento de gran importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se aborda la vulneración de los derechos fundamentales de varias comunidades indígenas, producida, entre otras causas por causas de degradación ambiental. Es relevante por tratarse del primer pronunciamiento de esta Corte en decidir sobre si se vulnera el derecho a un medio ambiente sano, como derecho fundamental autónomo y separado de otros derechos, como el de la vida, la salud o la propiedad.

También se dará cuenta de una serie de asuntos resueltos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con implicaciones ambientales. No obstante, la verdadera noticia (esperanzadora) en este sentido es la demanda interpuesta ante este tribunal contra 33 Estados miembros del Consejo de Europa por no actuar con suficiente contundencia frente al cambio climático, vulnerándose así derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

¹ Tal y como se afirma en los sucesivos informes del Relator especial de Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos, cargo que ostentó primero John Knox y actualmente desempeña David R. Boyd. Los informes están disponibles en: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/Annualreports.aspx>. [última consulta: 8 de octubre de 2020]

Antes de abordar estos casos, cabe recordar que todavía quedan pendientes un par de asuntos ante la Corte Internacional de Justicia con incidencias ambientales, aunque indirectas, que no han avanzado en meses. Se trata de los asuntos sobre *el estatus jurídico y uso de las aguas del Silala (Chile contra Bolivia)*² y sobre las *supuestas violaciones de los derechos soberanos y de espacios marítimos en el mar Caribe (Nicaragua c. Colombia)*³. Me remito a crónicas previas para justificar el interés de cada caso⁴. Volveré sobre ellos cuando se haga público el fallo, o se haya llevado a cabo alguna actuación relevante.

2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En el marco del sistema regional de protección de derechos fundamentales tutelado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), son varios los casos en los que la protección del medio ambiente ha sido tomada en consideración por el Tribunal⁵.

En dos de ellos, en realidad, la incidencia ambiental ha sido muy indirecta pues se trata de casos de persecución de activistas ambientalistas. En un primer caso,

² La demanda fue interpuesta por Chile el 6 de junio de 2016 contra Bolivia. La controversia versa sobre el estatus jurídico y el uso del Silala, río que nace de una fuente de aguas subterráneas en territorio boliviano pero que luego atraviesa la frontera para entrar en territorio chileno. Según Chile se trata de un río internacional, mientras que Bolivia lo considera como un manantial que se encuentra bajo su soberanía, tal y como declaró en 1999. Tras frustrados intentos de negociación sobre este particular, Chile acabó presentando una demanda ante la CIJ para que juzgue sobre la cuestión. Véase información sobre este asunto en la página de la CIJ: <https://www.icj-cij.org/en/case/162> [última consulta: 5 de octubre de 2020].

³ Fue una controversia iniciada por Nicaragua contra Colombia siendo de interés las contrademandas interpuestas por Colombia frente a Nicaragua, por cuanto tienen implicaciones ambientales. En concreto se referían a supuestas violaciones de Nicaragua de su obligación de proteger y preservar el medio marino, así como del deber de debida diligencia para proteger el derecho a beneficiarse de un ambiente sano y sostenible, en particular de los habitantes del archipiélago de San Andrés. Véase información sobre este asunto en la página de la CIJ: <https://www.icj-cij.org/en/case/155> [última consulta: 5 de octubre de 2020].

⁴ En relación con el caso *estatus jurídico y uso de las aguas del Silala (Chile contra Bolivia)*, véase “Jurisprudencia Ambiental Internacional (Segundo semestre 2016)”, RCDA, vol. 7 nº. 2, 2016. En el caso de *las supuestas violaciones de los derechos soberanos y de espacios marítimos en el mar Caribe (Nicaragua c. Colombia)*, véase “Jurisprudencia Ambiental Internacional (Primer semestre 2018)”, RCDA, vol. 9, nº.1, 2018.

⁵ La jurisprudencia del TEDH puede consultarse en: <http://hudoc.echr.coe.int>. [última consulta: 5 de octubre de 2020].

el asunto *Chernega y otros c. Ucrania*, de 18 June 2019⁶, concernía a un total de once nacionales ucranianos que denunciaron a su Estado por haber sufrido maltratos por parte de agentes de seguridad privada, actuando en ejercicio de poder público, en el curso de las protestas ambientalistas acaecidas en mayo y junio de 2010 y por no haber investigado los hechos y castigado a los agresores. El TEDH consideró vulnerados –si bien no para todos los demandantes⁷- los artículos 3 –prohibición de la tortura-, 6 –derecho a un proceso equitativo- y 11 –libertad de reunión y de asociación-, de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

En un segundo caso, el asunto *Kavala c. Turquía*, de 10 de diciembre de 2019⁸, se trataba de la detención y puesta en prisión preventiva de un nacional turco conocido por financiar y constituir varias ONG que tenían como finalidad, entre otros, la protección del medio ambiente. Fue acusado de contribuir a los disturbios y manifestaciones acaecidas en julio de 2013 contra el gobierno turco y al intento de golpe de Estado de julio de 2016. A pesar de no existir evidencias claras sobre su participación en dichos eventos, ha estado en prisión preventiva desde noviembre de 2017. El TEDH consideró, de forma unánime, que los artículos 5 –derecho a la libertad y a la seguridad- y 18 –Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos- de la CEDH se han visto vulnerados por la actuación arbitraria y no justificada del Estado turco al mantenerlo en prisión preventiva durante tanto tiempo, y, también como argumento añadido, por el efecto disuasorio producido sobre las actuaciones de ONG, así como la persecución sufrida por los defensores del medio ambiente, entre otros intereses de interés público.

El tercer caso si afecta ya a la protección del medio ambiente, no obstante, antes de presentarlo, es preciso hacer una pequeña aclaración del tipo de casos que llegan al Tribunal y que tienen incidencia ambiental. Los casos suelen clasificarse en dos escenarios posibles. El primero corresponde al grupo de casos en los que

⁶ Puede consultarse el texto de la sentencia en: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193877>. [última consulta: 8 de octubre de 2020].

⁷ Razón que motivó la emisión de una Opinión separada del Juez Pinto de Albuquerque, en la que expresaba su pesar por no haber constituido esta sentencia una respuesta aceptable a la imputabilidad al Estado de los abusos perpetrados por los cuerpos de seguridad privada en la disolución de manifestaciones.

⁸ Puede consultarse el texto de la sentencia en: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199515>. [última consulta: 8 de octubre de 2020].

el medio ambiente se salvaguarda a través de la protección de uno o varios de los derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El segundo escenario aglutina los supuestos en los que se vulnera un derecho fundamental del CEDH por razones ambientales. Respecto de este segundo tipo de casos⁹, suele consistir en que el TEDH comprueba la posible vulneración del derecho de propiedad recogido en el artículo 1 del Protocolo 1 al CEDH, cuando éste ha sido objeto de injerencias por razones ambientales. No obstante, en relación con el tercer caso que aquí se recensiona, y de forma bastante inusual, el derecho afectado es otro.

Así, en el asunto *Kaminskas c. Lituania*, de 4 de agosto de 2020¹⁰, se trataba de un caso en el que el demandante demandó a su Estado al considerar que la orden de demolición de su hogar, por haber sido construido en un terreno forestal protegido, vulneraba su derecho a disfrutar del domicilio, la vida privada y familiar, recogido en el artículo 8 CEDH¹¹. El TEDH constató, en un primer lugar, si existía en el caso concreto una interferencia del derecho invocado, recordando que el concepto de “hogar” empleado en su jurisprudencia es amplio y autónomo, y no necesariamente coincidente con el recogido en los ordenamientos de los Estados parte en el Convenio. Aunque la vivienda no había sido demolida aún, la orden era definitiva y podría suceder en cualquier momento, afirmando así la existencia de tal interferencia.

Seguidamente, pasó a comprobar los requisitos necesarios para determinar si la interferencia está justificada, en cuyo caso, no existiría vulneración del artículo 8 CEDH. Los requisitos son los siguientes¹²: (i) si la injerencia tiene base legal, (ii) si se realiza atendiendo a un interés general, y (iii) si existe proporcionalidad.

⁹ En relación con el primer tipo de casos, véanse las crónicas previas.

¹⁰ Puede consultarse el texto de la sentencia en: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203827>. [última consulta: 8 de octubre de 2020].

¹¹ Esta disposición ha servido de vía de entrada de la protección ambiental en el sistema de protección de derechos fundamentales del CEDH, tal y como ha afirmado el TEDH en una consolidada jurisprudencia. Así, cuando un problema ambiental, como el ocasionado por la contaminación atmosférica o acústica, afecta de manera directa y seria a un particular en su domicilio, el artículo 8 CEDH puede verse vulnerado. Sin embargo, aquí se invoca el artículo 8 CEDH contra una medida ambiental.

¹² Se trata de los mismos requisitos que los aplicados para verificar si el artículo 1 del Protocolo 1 al CEDH (derecho de propiedad) se vulnera o no (véase, a modo de ejemplo, el asunto

Por lo que se refiere al primer requisito, no existía desacuerdo entre las partes en que la prohibición de construir una vivienda sobre terreno forestal protegido y la obligación de demolerla tenía base legal.

En relación con el segundo, el TEDH recordó que la protección del medio ambiente es un interés general que ha ganado importancia en los últimos tiempos, en la que se incluye sin duda la protección de los bosques. La normativa que busca asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación que prohíbe la construcción de viviendas en bosques protegidos es, por tanto, un interés general que merece la pena ser tenido en cuenta a la hora de justificar las vulneraciones del artículo 8 CEDH.

El tercer requisito suele ser el más difícil de determinar porque exige una ponderación entre la necesidad de proteger el interés general y la garantía del derecho individual. En este sentido, el TEDH afirma que el margen de apreciación del Estado para dar preferencia a una u otra es amplio. Ello no quiere decir que no pueda someterse a escrutinio judicial, como comprobar la proporcionalidad de la medida. Así, el TEDH considera que el margen de apreciación puede variar teniendo en cuenta la naturaleza del derecho afectado, la importancia para el individuo en cuestión, la naturaleza de la interferencia y el objetivo perseguido por dicha interferencia. Basándose en las circunstancias específicas del caso concreto, el TEDH afirmó que la demolición de una vivienda constituye una de las interferencias más graves, sin embargo, también es cierto que el demandante era consciente de que el terreno sobre el cual construyó su vivienda era terreno protegido y no hizo nada por intentar legalizarla. En definitiva, la situación en la que se encontraba había sido causada por él mismo. El TEDH concluyó así que el Estado demandado no había sobrepasado el margen de apreciación y no existía vulneración del artículo 8 CEDH.

Podríamos preguntarnos si la estrategia de la parte demandada ha sido acertada al invocar el artículo 8 CEDH en lugar del artículo 1 del Protocolo al CEDH (derecho de propiedad). No obstante, a la vista de los argumentos utilizados en

Beinarovič y otros c. Lituania, de 12 de junio de 2018, comentado en la Crónica de Jurisprudencia ambiental (segundo semestre 2018-primer semestre 2019)", RCDA, vol.10, n.1, 2019.

la jurisprudencia del TEDH a la hora de resolver las vulneraciones del artículo 1, no parece que el TEDH hubiera llegado a una solución distinta¹³.

Por último, la verdadera noticia, ya anunciada en la introducción de esta crónica, es la presentación de lo que constituye el primer caso de litigación climática ante el TEDH. Efectivamente, el 3 de septiembre de 2020, seis niños y jóvenes portugueses (de 8 a 21 años)¹⁴ presentaron una demanda ante el TEDH contra 33 Estados miembros del Consejo de Europa (todos los Estados miembros de la UE 27, más el Reino Unido, Suiza, Noruega, Rusia, Turquía y Ucrania), con respecto a los preocupantes impactos sobre sus vidas, que el cambio climático está teniendo y tendrá en un futuro¹⁵.

En su opinión, las consecuencias del calentamiento global afectan directamente al disfrute de derechos tan importantes como a la vida y a la vida privada y familiar, salvaguardados por los artículos 2 y 8 CEDH, respectivamente. Las dos disposiciones imponen obligaciones positivas a los Estados parte en el Convenio en el sentido de regular las situaciones que puedan suponer riesgos de interferencia con estos derechos para reducirlos a un mínimo razonable. Por otra parte, recuerdan que existe ya una jurisprudencia consolidada del TEDH en la que se ha afirmado que, cuando los daños sobre el medio ambiente son de tal magnitud, pueden impedir el disfrute de los derechos contemplados en la

¹³ En un asunto parecido que concernía a la demolición de una vivienda construida en terreno forestal de forma ilegal -*Tumeliai c. Lituania*, de 9 de enero de 2018-, el TEDH sí consideró que la actuación del Estado fue desproporcionada pero porque se pudo constatar una actuación negligente de la propia Administración lituana al no haber al no haber anulado el permiso de construcción y al haberse aceptado la inscripción de la casa en el registro de la propiedad (véase el comentario a este pronunciamiento en la Crónica de Jurisprudencia ambiental (primer semestre 2018)", *RCDA*, vol.9,n.1, 2018). Estas circunstancias no se dieron en el presente caso.

¹⁴ La demanda, que ha sido interpuesta con el asesoramiento de la Global Legal Action Network (<https://www.glanlaw.org/>), puede accederse en: [https://youth4climatejustice.org/assets/images/Application_form+annex_\(with_redactions\)_for_website.pdf](https://youth4climatejustice.org/assets/images/Application_form+annex_(with_redactions)_for_website.pdf). [última consulta: 15 de octubre de 2020].

¹⁵ Efectos y evidencias fácticas que la propia demanda también fundamenta suficientemente, de los que son víctimas los seis demandantes, en cumplimiento del artículo 34 CEDH.

Convención –en particular, respecto del artículo 8 CEDH-, constatándose su vulneración¹⁶.

Es interesante que apelen, entre sus argumentaciones, a una interpretación de los artículos 2 y 8 CEDH en el contexto internacional, es decir, teniendo en cuenta otros instrumentos de Derecho internacional, como son el Acuerdo de París para la mitigación del cambio climático –en particular el artículo 2 en el que se establece el objetivo de no superar 1.5 grados centígrados de calentamiento global para no ocasionar daños muy significantes-, y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños –en particular, el artículo 3.1 que recoge el interés superior del niño-), así como a la luz de los principios de justicia intergeneracional y de precaución.

Adicionalmente, alegan que, dado que sufrirán los crecientes perjuicios a lo largo de su vida, también se produce una discriminación por razón de la edad y, por lo tanto, una vulneración del artículo 14 CEDH. Este artículo prohíbe ser discriminado en el disfrute del resto de derecho de la Convención, en este caso, los previstos en los artículos 2 y 8 CEDH, antes citados. Efectivamente, la imposibilidad de disfrutar de dichos derechos se agrava en particular para las generaciones de jóvenes, a la vista de que vivirán más tiempo confrontados con los perjuicios ambientales ocasionados por el cambio climático, a la vez que la magnitud y gravedad de tales perjuicios será también mayor conforme pase el tiempo. Los demandantes consideran que no hay ninguna razón objetiva y razonable para trasladar la carga de mitigar el cambio climático a las generaciones más jóvenes.

Los demandantes sostiene específicamente que los Estados demandados no están reduciendo suficientemente sus emisiones nacionales y también son responsables de las emisiones “extranjeras” por cuanto: (i) exportan combustibles fósiles, (ii) importan mercancías para cuya producción y transporte se han utilizado combustibles fósiles; y (iii) contribuyen a las realizadas en el extranjero por entidades y empresas bajo su jurisdicción (por ejemplo, mediante

¹⁶ Véanse los asuntos Tatar c. Rumanía de 27.02.2009 o Dubetska c. Ucrania de 10.02.2011, entre otros. La jurisprudencia del TEDH en este sentido ha sido ampliamente comentada en las Crónicas de Jurisprudencia Ambiental publicada en anteriores números de la RCDA.

la extracción de combustibles fósiles en otro lugar o por la financiación de esta actividad).

Evidentemente no se trata de un caso fácil pues hay algunos escollos que tendrán que solventarse para obtener un pronunciamiento a favor de los demandantes.

El primero es de carácter procesal y es que el artículo 35.1 CEDH exige que se hayan agotado los recursos internos antes de acudir al TEDH. En este sentido, los demandantes solicitan al Tribunal que les exima de tal requisito pues, al haberse interpuesto frente a 33 Estados parte, esto haría virtualmente imposible litigar en paralelo en todos y cada uno de los sistemas judiciales de dichos Estados¹⁷. Tampoco serviría de mucho hacerlo sólo respecto de un Estado pues el cambio climático requiere una actuación conjunta de todos los países. Por otra parte, también está el factor tiempo, y es que tal exigencia supondría dilatar demasiado una actuación estatal que ya de por sí está llegando tarde.

De entrar en el fondo, también hay otras cuestiones interesantes sobre las que deberá pronunciarse el TEDH. Una de ellas es la determinación del margen de discrecionalidad que tienen los Estados en la adopción de medidas para mitigar el cambio climático, que a la vista del ambicioso requisito de no superar 1.5 grados marcado por el Acuerdo de París para evitar perjuicios graves irreparables, no debiera ser muy amplio.

Pero también el TEDH tendrá que valorar si es posible cuantificar las responsabilidades de cada Estado respecto de un problema ambiental de naturaleza difusa en su creación y efectos, y si es necesario exigir este vínculo de causación o no. Y, por otro lado, tendrá que decidir sobre la responsabilidad de los Estados por emisiones realizadas fuera de sus territorios, pero de alguna forma bajo su “control” (bien porque exportan de recursos fósiles o por su vínculo con determinadas empresas que producen emisiones fuera de su territorio), lo que conlleva el problema de la aplicación extraterritorial del Convenio.

¹⁷ La ventaja de interponer una demanda ante el TEDH que consiste en poder aglutinar un buen número de Estados demandados, puede tener el inconveniente de la exigencia de agotar los recursos nacionales existentes en todos ellos antes de poder acudir al TEDH.

A la espera de la decisión del TEDH sobre la admisibilidad de la demanda¹⁸, es una buena noticia que finalmente se haya producido un caso de este tipo, dado que cada vez es más evidente la interconexión entre el cambio climático y los derechos humanos. ¿Dará el paso el TEDH, como ha hecho su homóloga la Corte interamericana de Derechos Humanos, en reconocer la necesidad de proteger naturaleza para poder garantizar los derechos humanos? Esperemos que en la próxima Crónica podamos reportar que sí.

3. Corte interamericana de Derechos humanos

El 6 de febrero de 2020, la Corte interamericana de Derechos Humanos emitió un interesante pronunciamiento, asunto Comunidades indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honkat (Nuestra tierra c. Argentina)¹⁹, que supone un paso más en la senda marcada en su *Opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos* (OC-23/17) de 15 de noviembre de 2017²⁰. Ya en su Opinión consultiva había afirmado que del artículo 26 de la Convención Americana podía extraerse un derecho a un medio ambiente sano, dada la obligación de los Estados de alcanzar el desarrollo integral de sus pueblos. No obstante, no ha sido hasta este reciente pronunciamiento cuando ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre una posible vulneración del derecho a un medio ambiente sano, entre otros.

En el presente caso se trataba de una demanda de un buen número de comunidades indígenas –conformadas formalmente a través de la asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat- frente al Estado argentino por

¹⁸ No sería el primer tribunal internacional que no admite a trámite un litigio climático. Así sucedió con el asunto *Carvalho y Otros c. Consejo y Parlamento Europeo* (T-330/18), solicitud que fue inadmitida por el Tribunal General de la UE por carecer los demandantes de legitimación activa para interponer un recurso de anulación contra el paquete de medidas legislativas climáticas de la UE (véase un comentario sobre este caso en: <https://aquiescencia.net/2019/01/25/el-asunto-ferrao-carvalho-c-parlamento-y-consejo-un-nuevo-caso-urgenda-en-la-ue/>. [última consulta: 10 de octubre de 2020]). No obstante, esta decisión fue apelada ante el Tribunal de Justicia de la UE, que todavía no se ha pronunciado.

¹⁹ Puede consultarse el pronunciamiento en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf. [última consulta: 8 de octubre de 2020].

²⁰ La Opinión se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf. Un comentario a la misma puede consultarse en Crónica de Jurisprudencia ambiental (primer semestre 2018)”, *RCDA*, vol.9,n.1, 2018.

actuaciones acaecidas en sus tierras ancestrales y que datan de un periodo superior a los 28 años. Entre estas actividades se encontraban la construcción de un puente internacional, así como el asentamiento de población “criolla” que desarrollaban actividades ganaderas, cercaban las tierras con alambrados y procedían a la tala ilegal de árboles. Estas actividades no sólo se realizaban sin el consentimiento de las comunidades indígenas en cuyas tierras se producían, sino que también tenían un efecto perjudicial en el disfrute de sus derechos a un medio ambiente sano, a una alimentación adecuada, al agua y a desarrollar su vida cultural, todos ellos previstos en el artículo 26 de la Convención Americana de derechos humanos²¹.

Por lo que concierne al derecho a un medio ambiente sano, la Corte recordó las consideraciones recogidas en su Opinión consultiva de 2017, afirmando que este derecho constituye un interés universal y que es fundamental para la existencia de la humanidad. Además, reivindicó su naturaleza autónoma del resto de derechos puesto que protege tanto la naturaleza como sus componentes, tales como los bosques, ríos, mares, entre otros, como intereses jurídicos en sí mismos, con importancia para otros seres vivos con los que se comparte el planeta. Y ello con independencia de los efectos que pueda tener para el ser humano. Lo que no obsta para afirmar que los perjuicios ambientales también pueden afectar a otros derechos humanos (par. 203).

Más aún, se trata de un derecho que se recoge expresamente en la constitución argentina, entre otras constituciones, así como en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, como el Protocolo de San Salvador (que reconoce el derecho a un medio ambiente sano en su artículo 11).

²¹ El artículo 26 se encuentra recogido en el Capítulo III relativo a los “Derechos económicos, sociales y culturales” y establece lo siguiente:

“Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”

En cuanto a su contenido, el derecho a un medio ambiente sano implica, por un lado, una obligación de respeto, y, por otro lado, también una obligación de garantía que se manifiesta en el deber de prevenir interferencias. Los Estados tienen que establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades que pudieran ser perjudiciales y adoptar las medidas necesarias *ex ante* a la producción del daño ambiental (pars. 207 y 208). Especialmente importante es que, ante actividades potencialmente dañinas para el medio ambiente, los Estados deben: (i) regular tales actividades, (ii) supervisar y fiscalizarlas; y (iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; (iv) establecer planes de contingencia, y (v) mitigar los casos en los casos en los que se produzca el daño ambiental (par. 208).

Por otro lado, un medio ambiente dañado también tiene impactos negativos en los derechos humanos, que se dan con mayor intensidad ante poblaciones vulnerables como son los pueblos indígenas, así como las comunidades cuya supervivencia depende de los recursos ambientales (par. 209). Estas constataciones no hacen más que evidenciar la estrecha vinculación de interdependencia entre la protección del medio ambiente y la salvaguarda de los derechos fundamentales (par. 244).

En el caso concreto, existen pruebas suficientes de que el desarrollo de la actividad ganadera de la población criolla, la instalación de alambrados y la tala ilegal en territorio de las comunidades indígenas han menoscabado sus derechos durante años. Se ha producido una degradación ambiental, pero también un obstáculo al acceso de los recursos naturales indispensables para su supervivencia y preservación de su forma de vida. El Estado argentino era conocedor de estos hechos, que habían sido denunciando en numerosas ocasiones, y, aunque había tomado algunas medidas, no fueron suficientes para garantizar sus derechos y prevenir sus lesiones (par. 287). De esta forma, la Corte determinó que se vulneraron los derechos de las comunidades indígenas previstos en el artículo 26 de la Convención Americana, esto es, derecho a su identidad cultura, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua (par. 289). Sin duda, un pronunciamiento bien recibido entre los defensores del medio ambiente.

En otro orden de cosa, también cabe hacer referencia a una petición presentada en julio de 2019 por representantes de una serie de organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas²², solicitando audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos²³ en relación con los impactos del cambio climático sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. La audiencia se produjo en el 173 periodo de sesiones, que tuvo lugar del 22 de septiembre al 2 de octubre de 2019 septiembre de 2019, en Washington DC²⁴.

Las organizaciones pidieron que la Comisión incorporase a su mandato la crisis climática como una prioridad que amenaza los derechos humanos y los ecosistemas y le urgieron a que instara a los Estados de la región a adoptar una serie de medidas:

- que adoptaran medidas cautelares relacionadas con el cambio climático;
- que protejan y garanticen los derechos de los defensores del medio ambiente;
- que busquen una acción climática más ambiciosa a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional de 2020;
- que hagan hincapié en la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático;
- que pongan fin a las actividades que agraven el cambio climático y amenacen el goce efectivo de los derechos humanos;

²² Las organizaciones eran: la Fundación Pachamama (Ecuador), Dejusticia (Colombia), EarthRights International (regional), AIDA (regional), FUNDEPS (Argentina), FIMA (Chile), DPLF (regional), IDL (Peru), CELS (Argentina), Engajamundo (Brazil), AHCC (Honduras), Conectas (Brazil), FARN (Argentina), CEMDA (México), y La Ruta del Clima (Costa Rica).

²³ La Comisión Interamericana forma parte, junto con la Corte Interamericana, del Sistema interamericano de derechos humanos. Además de conceder audiencias, sus principales funciones son las de recibir peticiones individuales frente a Estados incumplidores; el control de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros, también mediante investigaciones *in loco*; y la atención a las líneas temáticas prioritarias en sus informes. Es una pieza, por tanto, importante en el fomento y garantía de los derechos humanos en este sistema regional.

²⁴ Un resumen sobre las audiencias puede consultarse en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/248A.pdf>. Las audiencias también son grabadas. El video de la presente petición está disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=THZYEPEytm0&list=PL5QLapyOGhXv6HBC1inn6DjTfDd4-7Rbx&index=20>. [última consulta: 14 de octubre de 2020].

- que promuevan modelos de transición energética, que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, los niños y los jóvenes, las mujeres y las comunidades rurales;
- que adopten medidas específicas para garantizar el acceso a la información relacionada con los impactos del cambio climático; y
- que promuevan la igualdad de género.

La Comisión se comprometió a tener en cuenta todas estas peticiones y a hacer suyo en la agenda el estudio de la estrecha vinculación entre el cambio climático y la protección de los derechos humanos.

4. Órganos de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio

Por lo que concierne al sistema de solución de diferencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio, ya contamos con el informe del panel en el -el asunto *EE.UU.-determinadas medidas relativas al sector de la energía renovable* (DS 510)-²⁵.

Recordemos que se trataba de una disputa iniciada por la India, en respuesta al asunto ya decidido – el asunto *India-determinadas medidas relativas a las células solares y los módulos solares* (DS456)²⁶ - en el que la India fue parte demandada también por la implementación de ciertas políticas de incentivación de la energía renovable, contrarias al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GATT, por sus siglas en inglés)²⁷. En el caso que aquí se presenta, se cuestionaba la compatibilidad con algunos acuerdos de la OMC de un total de 11 medidas adoptadas por los gobiernos de los Estados de Washington, California, Montana, Massachusetts, Connecticut, Michigan, Delaware y Minnesota, que establecían

²⁵ La información relevante sobre esta controversia está disponible en la página Web de la OMC: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds510_e.htm. [última consulta: 5 de octubre de 2020]

²⁶ La información relevante sobre esta controversia está disponible en la página Web de la OMC: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds456_e.htm. [última consulta: 15 de abril de 2018].

²⁷ Puede consultarse el comentario a este pronunciamiento en la “Crónica de Jurisprudencia ambiental (segundo semestre 2017)”, *RCDA*, vol.8, n.2, 2017 [última consulta: 10 de octubre de 2020].

incentivos de diverso tipo al empleo de productos nacionales, con preferencia a los importados.

Desde que el 9 de septiembre de 2016, la India solicitara la celebración de consultas con los EE.UU.²⁸, tan tenido que pasar casi tres años hasta que el grupo de trabajo circulara su informe, el pasado 27 de junio de 2019²⁹. Este informe se ha hecho esperar, pero el resultado no ha sorprendido. Al igual que pasó con la controversia en la que la India fue parte demandada y EE.UU., la parte demandante (véase *supra*), también en esta ocasión el grupo especial ha constatado que las medidas estadounidenses confieren un trato menos favorable a los productos importados respecto de “productos similares” nacionales, menoscabándose el artículo III.4 GATT³⁰.

No obstante, lo que sí sorprende es que EE.UU. no hubiera tratado de invocar el artículo XX GATT, como sí hizo la India en el su momento, para poder justificar el carácter “ambiental” de tales medidas. El artículo XX GATT, de hecho, ha sido la vía de entrada tradicional de las preocupaciones ambientales en el sistema comercial ya que contiene una serie de excepciones que, atendiendo a objetivos de interés público, admiten las restricciones al comercio y justifican así una posible vulneración de la normativa GATT³¹. De hecho, en el asunto *India-determinadas medidas relativas a las células solares y los módulos solares*, antes citado, la India invocó el apartado b) del artículo XX GATT para argumentar

²⁸ La celebración de consultas es el primer paso en la resolución de disputas en el seno de la OMC. Véase el Entendimiento de Solución de Diferencias, disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs/s/legal/s/28-dsu_s.htm. [última consulta: 14 de octubre de 2020]

²⁹ La composición del panel se retrasó mucho, además de requerir éste más tiempo para examinar el caso. Esto no es de extrañar pues se trata de un asunto de una gran dificultad jurídica al afectar a un buen número de medidas de diversa índole técnica y fiscal.

³⁰ Aunque India también había argumentado la incompatibilidad de las medidas estadounidenses con disposiciones de otros acuerdos comerciales de la OMC (art. 8 del Acuerdo sobre medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio – Acuerdo MIC-, y los arts. 4, 7 y 30 del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias – Acuerdo SMC-), el grupo especial invocó el principio de economía procesal para no tener que examinar esos argumentos y decidir sobre su vulneración, una vez constatada la incompatibilidad con el art. III. 4 del GATT.

³¹ Un pronunciamiento clave en la interpretación de esta disposición para permitir conciliar los intereses ambientales y comerciales fue el Órgano de Apelación en el asunto EE.UU.-Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón, de 12 de octubre de 1998 (WT/DS58/AB/R). Véase información sobre este asunto en: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm [última consulta: 14 de octubre de 2020]

que las medidas controvertidas se habían adoptado para promover el desarrollo sostenible y sus compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático. EE.UU., en cambio, no hace ninguna consideración de carácter ambiental para justificar la adopción de dichas medidas, lo que no es tan descabellado dado que, aunque discriminatorias, sí que suponen un fomento de la energía solar. Puede que no lo hiciera a la vista de que la India no tuvo mucho éxito invocándolo, o puede que se debiera a que los intereses ambientales ya no son bien recibidos en el marco de la OMC, lo que no sería una buena noticia. Aunque el informe del grupo especial ha sido remitido al Órgano de Apelación, a petición de EE.UU., al no haberse argumentado en clave ambiental no es probable que las considere. Una vez se haga público, lo que ya lleva un retraso considerable, veremos si las consideraciones ambientales han sido nuevamente obviadas.